



Expediente: **047/2024 (A/SER-029397/2024)**

D. Francisco Javier Fernández Arroyo, Jefe de Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, como secretario de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al contrato de servicios denominado "Gestión del centro regional de estudios e innovación en servicios sociales 2025-2029"

### CERTIFICO

Que la Mesa de Contratación, en su reunión del día 28 de marzo de 2025, ha acordado excluir a la empresa FUNDACIÓN FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN (FASE) (NIF: G28466423) por los siguientes motivos:

- No cumple la *solvencia económica* por cuanto el importe de los dos años referidos ni iguala ni supera el valor estimado del contrato: 1.376.960,00 €.
- No cumple la *solvencia técnica* por cuanto únicamente se han tenido en cuenta las certificaciones emitidas por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Galapagar, por considerar que se refieren a trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.
- No cumple con la certificación de la empresa en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad, para los sectores IAF (Foro Internacional de Acreditación) nº. 33 Tecnología de la información o nº. 37 Educación, al no existir certificación de la empresa, sino el inicio de dos procesos paralelos, con las entidades AENOR, acreditada para los sectores IAF exigidos, e I19, no acreditada por ENAC.
- La persona directora del centro, PLG, no aporta una titulación académica correspondiente a alguno de los ámbitos de estudio exigidos en el PPT, no aporta la documentación probatoria de la experiencia exigida.
- En cuanto a la persona experta en formación, MICO, no aporta una titulación académica que correspondiente a alguno de los ámbitos de estudio exigidos en el PPT, no aporta ni la documentación probatoria de la experiencia exigida ni el contrato de trabajo.
- En cuanto a la persona experta en innovación, MSS, no aporta la documentación probatoria de la experiencia exigida ni el contrato de trabajo y no aporta el contrato de trabajo.
- En cuanto a la persona experta en gestión de la información, ICP, no aporta la documentación probatoria de la experiencia exigida ni la documentación probatoria de los conocimientos, como usuario, de las aplicaciones informáticas exigidas ni el contrato de trabajo.
- En cuanto a la persona administrativa, MSMP, aporta una titulación académica que no pertenece a ninguno de los ámbitos de estudio exigidos en el PPT, no aporta ni documentación probatoria de la experiencia exigida ni la documentación probatoria de los conocimientos, como usuario, de las aplicaciones informáticas exigidas ni el contrato de trabajo.

Contra el presente acto de trámite, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a fecha de firma

EL PRESIDENTE DE LA MESA  
Vº. Bº.

Firmado digitalmente por: BENITO MARTÍNEZ ANTONIO  
Fecha: 2025.04.01 13:33

Fdo. Antonio Benito Martínez

EL SECRETARIO DE LA MESA

Firmado digitalmente por: FERNÁNDEZ ARROYO FRANCISCO JAVIER  
Fecha: 2025.04.01 13:32

Fdo. Francisco Javier Fernández Arroyo